

Egoísmo del Poder en Todos los Niveles

# La Inequidad de la Política

- ★ Insalvable Brecha Entre Gobernantes y Gobernados
- ★ La Elite Impone Sacrificios que Ella Nunca Asume
- ★ Existe un Tercer Camino en la Búsqueda de Justicia

LORENZO MEYER

Uno de los problemas básicos del poder político es el de la responsabilidad. Y este asunto está, a su vez, enmarcado por, al menos, otros dos elementos problemáticos: la asimetría y la equidad. Es un hecho histórico evidente que son siempre unos pocos —los gobernantes— quienes toman las decisiones que afectan a los muchos. Y es igualmente cierto que, con una frecuencia descorazonadora, son principal o exclusivamente los otros —los gobernados, los faltos de poder— los que experimentan las consecuencias de esas decisiones, especialmente cuando éstas significan sacrificios. Sabemos, por ejemplo, que raras veces el líder que declara la guerra vive directa y cotidianamente sus horrores. Es igualmente cierto, que quienes deciden cuáles han de ser los lineamientos de la política hacia los indigentes no viven la miseria y,

SIGUE EN LA PAGINA QUINCE

por tanto, son ajenos a los efectos de sus políticas. Los ejemplos pueden multiplicarse hasta formar una cadena prácticamente interminable. Una de las grandes verdades de la política es tan simple como brutal: unos son los que deciden, ordenan y se protegen, y otros son los que, indefensos, obedecen y padecen. La política no es, desde luego, únicamente inequidad, pero en toda política hay inequidad, injusticia.

La política, según la definición ya clásica de David Easton, es el proceso por medio del cual la autoridad determina —directa o indirectamente— cómo habrán de distribuirse los bienes o valores de que dispone una sociedad, y que siempre son escasos. De manera inevitable, en esta distribución, la autoridad termina por ser juez y parte. Por más salvaguardias legales que se pongan, por más democrático o equitativo que sea un sistema de poder —y los términos no son sinónimos—, en la distribución de recursos y oportunidades, aquellos que ocupan los cargos de autoridad, tienden inevitablemente a anteponer sus intereses individuales o de grupo por sobre los del resto; en particular por sobre los de los más débiles.

El egoísmo del poder se da en todos los niveles. En un hospital, por ejemplo, se da prioridad a los intereses de los administradores y del cuerpo médico sobre los de los pacientes. En un sindicato, la defensa más encarnizada de los líderes no es la de los derechos de los trabajadores frente al capital, sino la que libran esos líderes por mantener e incrementar sus propios privilegios frente a los agremiados. En una universidad, la acción institucional está dirigida más a sostener las posiciones e intereses de sus directivos y de los académicos, que a la búsqueda del conocimiento y la preparación de los alumnos. Sin embargo, es en la arena política donde adquiere su mayor dimensión el conflicto entre el líder como representante del interés general y el líder en tanto individuo con intereses particulares, diferentes e incluso opuestos, al interés general.

En uno de los debates televisados de la campaña presidencial en los Estados Unidos y que acaba de concluir, una joven del público pidió a los tres candidatos que explicaran cómo les afectaba, en lo personal, la mala situación por la que atravesaba la economía norteamericana, y que para millones de norteamericanos se había traducido en problemas serios, incluso dramáticos. Esa pregunta, tan sencilla, tocó el corazón de uno de los grandes problemas de la política.

Como es bien sabido, ninguno de los tres personajes que en ese momento competían por el favor del electorado norteamericano

—el millonario Ross Perot, el Presidente y hombre con negocios en Texas, George Bush, y el exitoso abogado y gobernador reelecto de Arkansas, William Clinton— estaba en condiciones de experimentar directa y personalmente, algunos de los efectos más negativos de la recesión en su país. Sin embargo, y pese a no haber sentido en carne propia las dentelladas del desempleo, de la falta de seguro médico, de la imposibilidad de pagar la hipoteca, etcétera, sería uno de ellos el que tendría en sus manos la respuesta que desde el poder se daría a las demandas de los desempleados, los pensionistas, los pobres estructurales, las minorías raciales.

En realidad no necesitamos salir de nuestras fronteras para encontrar ejemplos similares al anterior y que ilustran la naturaleza de la inequidad de la política. En México, el establecimiento del nivel del salario mínimo es una decisión gubernamental o, más concretamente, presidencial. Ese salario mínimo es hoy tan ridículamente mínimo —14,445 pesos diarios— que, bajo cualquier definición, resulta imposible caracterizarlo como justo, pues ninguna familia podría sobrevivir con él. Sin embargo, y según las estadísticas del INEGI, en 1991 el 8.2% de la población económicamente activa (2 millones de trabajadores) recibía ese salario. Y esa misma fuente nos informa que alrededor de 60% de los mexicanos con trabajo tenían que hacerle frente a sus necesidades con no más de dos salarios mínimos (867 mil pesos al mes).

Los responsables políticos de imponer ese increíble salario mínimo, lo hacen como una de las formas para lograr la preciada meta de una inflación anual de un dígito e igualar en ese campo a México con sus socios en la zona de libre comercio de la América del Norte. Sin embargo, la frugalidad que le imponen a los trabajadores no se la imponen a sí mismos. Según las también increíbles cifras contenidas en el Proyecto de Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para 1993 (véase al respecto la prensa el 11 de noviembre), se han dado a sí mismos salarios muy distintos de los que imponen a esos 14 millones de trabajadores sobre los que recae el sacrificio que requiere para funcionar el modelo neoliberal. De acuerdo con las supuestas cifras oficiales, un secretario de Estado recibirá el año entrante un sueldo de 9 millones de pesos mensuales, y el del Presidente alcanzará los 13 millones. Obviamente esas cifras son absolutamente irreales, pues sabemos que un simple diputado —ese cero a la izquierda de la política mexicana— cobra alrededor de 15 millones de pesos al mes. Y de buena fuente supe que un subsecretario

# LA INEQUIDAD

EXCELSIOR Jueves 24 de Diciembre de 1992 15-A

## DE LA POLITICA

no deja su mes con menos de treinta millones de pesos en su cuenta bancaria, suma a la que se debe añadir auto, chofer, gastos de representación, etcétera. Es probable que la razón de que se asiente que un secretario de Estado gana únicamente nueve millones de pesos, no es por pudor, sino para poder entregar a Hacienda únicamente la ridícula suma de 2'800,000 pesos, como su contribución al patrimonio común.

Pero volvamos a lo medular. Para los propósitos del argumento que aquí se expone, se puede aceptar que las cifras oficiales de los sueldos de la élite política son reales, aunque sabemos que no lo son. De ellas resultaría que quienes han tomado la decisión de que un trabajador mexicano gane uno o dos salarios mínimos, se han dado a sí mismos en teoría, un sueldo que equivale a 20 veces ese salario mínimo en el caso de un secretario

de Estado o de 30 en el caso del Presidente. Es decir, el sacrificio se lo imponen a otros, no a ellos. Ahora bien, si dejamos a un lado la ficción y suponemos que los ingresos reales de un secretario de Estado son el doble de los de sus subsecretarios —respecto del Presidente es muy difícil calcular sus ingresos reales—, entonces hay que multiplicar las cantidades anteriores por cinco o seis veces, y eso equivale, al menos, a cien salarios mínimos. En esas circunstancias, ¿cómo va a poder representar un secretario, y menos el Presidente, el interés del mexicano promedio, si viven en dos mundos absolutamente distintos?

Este aspecto de la política —la injusticia que implica el hecho de que quien decide, ordena y sostiene una decisión, no tiene que vivirla—, fue quizá uno de los motivos que llevó en el siglo V a San Agustín a considerar que, en princi-

pio, ningún hombre tiene derecho a imponer su voluntad sobre otros hombres. Pero como era un hecho incontrovertible que el poder político existía, y que los príncipes imponían su voluntad e intereses sobre los de sus súbditos, el que fuera obispo de Hipona y Padre de la Iglesia, concluyó que el poder político no era más que uno de los resultados del pecado original; es decir, de la imperfección humana. Milenio y medio más tarde, Carlos Marx se mostraría de acuerdo con una parte de la idea agustiniana de la política: la de la imposibilidad de unir poder y equidad. Sin embargo, Marx no tenía la resignación de San Agustín y propuso, ni más ni menos, la superación de la política —y la injusticia— por la vía de la violencia revolucionaria, pues quienes no eran nada debían y podían serlo todo; es decir, los proletarios. Cuando esto ocurriera —y

tenía que ocurrir—, entonces sería posible superar la explotación del hombre por el hombre, y la política dejaría de existir.

A estas alturas del siglo XX, cuando el paradigma marxista ha quedado casi sepultado bajo los escom-

bros del "socialismo real", no podemos refugiarnos en la idea de la abolición de la política y, con ella, del ejercicio del poder de una minoría sobre la mayoría.

Pero por otro lado, tam-

po es útil seguir la vía agustiniana: apartarnos de la política por ser ésta una actividad intrínsecamente corrupta, propia de espíritus moralmente inferiores, y posponer hasta el otro mundo la demanda por la igualdad y la justicia. Hay un tercer camino.